

Myanmar: Una nueva etapa en la lucha contra el orden militar – ¡La resistencia llama a la solidaridad!

Via [International Viewpoint](#)

Seis largas semanas después del golpe de Estado del 1 de febrero, el vasto movimiento de desobediencia civil en Myanmar ha obtenido una primera victoria significativa: impedir que la junta se atribuya el control del país. El ejército ha respondido recurriendo, sobre todo, a una política de terror multifacética. Hemos entrado en una nueva etapa en el enfrentamiento entre el orden militar y el movimiento democrático. Frente a la violencia del asalto, la resistencia continúa su lucha en circunstancias muy difíciles. Debe contar con la solidaridad internacional.

A partir del 1 de febrero, la junta llevó a cabo detenciones cada vez más masivas: unas 2.000 personas fueron encarceladas (temporal o definitivamente). Los asesinatos empezaron a mediados de febrero, y a partir de finales de mes se hicieron sistemáticos; hasta la fecha, el diario digital Irrawaddy contabiliza más de 60 personas asesinadas y la cifra sigue aumentando. El espectro de las masacres de 1988 y sus 3.000 muertos persigue al país, aunque la situación ha cambiado. En aquel momento, el país estaba aislado del mundo por la junta gobernante, y tuvo que pasar un año para que se conociera todo el alcance del derramamiento de sangre. Ahora estamos informados de la situación cotidiana y el ejército aún no ha conseguido, a pesar de sus esfuerzos, garantizar una censura efectiva. Se ha creado un colectivo de fotoperiodistas, The Myanmar Project, y muchos periódicos siguen cubriendo los acontecimientos mientras escribo este artículo.

Impedir la «normalización interna»

El movimiento de desobediencia civil ha obtenido una primera y decisiva victoria: gracias a su masividad, ha impedido a los golpistas imponer sus hechos consumados. Nadie puede ignorar que se trata de un régimen ilegítimo; los militares han perdido la batalla de la comunicación. En el plano interno, se esfuerzan por normalizar la situación. El funcionamiento de la administración se ve obstaculizado por la huelga de funcionarios. El sistema bancario público y privado está paralizado, las empresas (incluidas las de los militares) están paralizadas. El transporte ferroviario está gravemente perturbado, así como la producción de gas y el refinado de petróleo, según el sindicato CTUM. Los magnates se preocupan por las consecuencias económicas del golpe y apoyan discretamente a la resistencia. Las personalidades organizan colectas para ayudar a los huelguistas que han perdido todos sus ingresos. Unos 600 policías han desertado, algunos han encontrado refugio en la India. Un gran número de diplomáticos y embajadas se han negado a reconocer a los golpistas, lo que ha restringido los contactos internacionales de la junta.

En este país budista en el que la orden monástica cuenta con 500.000 miembros divididos en 9 sectas, el clero se ha mantenido hasta ahora al margen, a diferencia de lo ocurrido en 2017. Grupos de bhikkus (monjes) sí acudieron a las manifestaciones, agitando pancartas, pero se quedó en algo anecdótico: fueron menos numerosos que los monjes pro-ejército que apoyaron públicamente el golpe de Estado unos días antes de que se produjera. Se supone que las autoridades religiosas oficiales (la Sangha) no se involucran en política, pero esto no se cumple en la práctica. Los movimientos con referentes budistas abarcan todo el espectro político, hasta la extrema derecha fascista, como fue el caso de la Organización para la Defensa de la Raza y la Nación (Ma Ba Tha), que desempeñó un papel muy importante en la época del genocidio rohingya en 2014.

La Sangha suele estar cerca del gobierno, sin que su carácter dictatorial sea la manzana de la discordia. Desde el golpe de Estado, la cúpula militar se ha encargado de cortejar la jerarquía de órdenes más que nunca. Hay monjes pro-democracia, probablemente más numerosos de lo que parece hoy, pero no se identifican con la Liga Nacional para la Democracia (LND), liderada por Aung San Suu Kyi (ASSK, una figura muy autoritaria), con la que han mantenido una relación muy tensa. Un monje de Rangún dijo a Bruno Philip, periodista de Le Monde: «¡Es una pena que el muy respetado general Aug San, padre de la señora Suu Kyi, líder del movimiento anticolonial haya dado a luz a una mujer así!»[1]. Uno de los líderes budistas más influyentes, Sitagu Sayada, de quien se dice que disfruta de la alta vida y es muy cercano al General en Jefe, ha sufrido una oleada de críticas en las redes sociales. Su secta, la Shwe Kyin, ha pedido finalmente a los militares que sean más comedidos en la represión. [2]

El Movimiento de Desobediencia Civil (MDC) sigue organizando huelgas generales de un día de duración y uno de sus componentes, la Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM) ha lanzado un llamamiento urgente a la solidaridad con el objetivo particular de obtener una «dura sanción integral que pueda acabar con el régimen y su estructura» para «reconstruir Birmania desde cero, sin ninguna interferencia de los militares». 3] Lo que está en juego está claro. Se trata de acabar de una vez por todas con el orden militar impuesto de forma casi ininterrumpida en Birmania desde 1962. Para ello, los pueblos de la Unión de Birmania necesitan una fuerte acción internacional.

Aislar y sancionar a la Junta

La Junta probablemente pensó que las previsibles condenas internacionales al golpe de Estado no tendrían grandes consecuencias. Un error. El movimiento de desobediencia civil ha cambiado las reglas del juego. Muchas de las potencias establecidas no pueden simplemente hacer la vista gorda o

contentarse con protestas formales. De hecho, se han adoptado sanciones que tienen cierto peso.»¿Cómo salir del atolladero?», se pregunta la periodista de Mediapart Laure Siegel. Ella responde en un notable artículo en el que pide «apoyo internacional, embargo, boicot, resistencia interna, alianzas ciudadanas transfronterizas». ¡Un buen resumen! [4]

Los militares buscan agotar el movimiento cívico, aterrorizar a la población y dividir a la oposición. La resistencia democrática tiene una necesidad vital de solidaridad, es una cuestión de supervivencia, pero hoy en día es posible asestar golpes muy duros a la junta si se mantiene la presión política, al igual que es posible aportar un apoyo concreto a las luchas populares. Los siguientes ejemplos lo demuestran.

El representante de Myanmar en las Naciones Unidas denunció el golpe, lo que dificulta el reconocimiento de facto de la junta. Las embajadas se están separando, manteniendo su lealtad al gobierno (ahora clandestino) de la Liga Nacional para la Democracia (LND). La junta no ha sido reconocida por los organismos internacionales, incluida la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha bloqueado una transferencia de 1.000 millones de dólares del Banco de la Reserva Federal de Nueva York al Banco Central de Myanmar. Por tanto, la congelación de activos birmanos en el extranjero es posible. Debe generalizarse y prohibir los viajes al extranjero de los dignatarios del régimen golpista.

La Unión Europea suspende oficialmente las ayudas que puedan beneficiar a los militares. Hay que pasar de las declaraciones a los hechos. Se ha creado una plataforma que rastrea las empresas occidentales que suministran material «sensible». Se denuncia la responsabilidad de las empresas extranjeras que equipan a las fuerzas represivas de la Junta. Una empresa italiana le vende armas ligeras (que escapan a los controles del comercio de armamento pesado, pero que son adecuadas para la represión). Las empresas suecas ofrecen teléfonos

inteligentes, mientras que las empresas estadounidenses venden programas informáticos de piratería. Israel envía drones de vigilancia o capaces de lanzar gases lacrimógenos sobre la población. En términos de inversión y comercio, la integración de la economía birmana es sobre todo regional: Singapur, China, Tailandia, India... países poco proclives a inmiscuirse en los «asuntos internos» de su vecino. Sin embargo, algunas empresas extranjeras han dejado de tratar con la Junta. Es el caso, por ejemplo, de Kirin, el gigante cervecero japonés, que ha puesto fin a una empresa conjunta de seis años con un holding del ejército. La empresa australiana Woodside ha decidido cesar sus actividades en los yacimientos de petróleo y gas, que suponían 920 millones de euros al año. [6]

Se está organizando un llamamiento al boicot internacional de los productos de la «economía caqui», también a través de plataformas de Internet. La Federación de Trabajadores Generales de Myanmar (FGWM) ha hecho un llamamiento a las marcas de ropa para que protejan a sus huelguistas de las medidas de represalia de los empresarios o de los militares por su participación en el Movimiento de Desobediencia Civil: «negarse a hacerlo equivale a guardar silencio contra los crímenes de la junta militar de Myanmar». LaborNotes ofrece una lista de marcas que utilizan producción birmana. [7]

Entre las multinacionales sobre las que hay que ejercer la máxima presión están, obviamente, en el sector petrolero, Chevron (Estados Unidos) y Total (Francia) que pagaron cerca de 230 millones de euros en 2019 en impuestos y acciones al gobierno birmano. Hoy Total rinde cuentas al pueblo birmano. «Doctor Sasa», una figura de la LND, dijo en una entrevista con Le Monde: «Le ruego al presidente Emmanuel Macron que nos conceda su ayuda, incluyendo, en el futuro, el apoyo militar a nuestro futuro ejército federal. También pido a la empresa Total, presente en Birmania, que deje de colaborar económicamente con el régimen». [8]

La resistencia se está reorganizando para hacer frente al

salto cualitativo de la represión. Está ensayando medidas de autodefensa sin armas en barrios y pueblos para detener el movimiento militar. Los activistas conocidos están pasando a la clandestinidad. Se están reforzando los contactos con la emigración birmana y los movimientos de solidaridad en los países vecinos (principalmente Tailandia). Se han enviado millones de kyats (la moneda local) desde Tailandia, donde se encuentra el 70% de los trabajadores inmigrantes birmanos. Existe un fuerte sentimiento de proximidad entre los activistas de ambos lados de la frontera, donde los jóvenes han liderado la Alianza del Té de Leche regional contra el autoritarismo. En Birmania, el Movimiento de Desobediencia Civil constituye el primer marco de cooperación entre, en particular, la Generación Z (jóvenes de la educación), la federación sindical CTUM, que convocó el 8 de febrero una huelga general, y los comités populares locales. Por su parte, la Liga Nacional para la Democracia ha reconstituido un gobierno que exige ser reconocido por la ONU. Por último, el 11 de febrero se fundó un «Comité de Huelga General de Nacionalidades», que representa a más de 24 grupos. La mitad de las organizaciones étnicas armadas amenazaron a la Junta con tomar represalias en caso de que el ejército o la policía ataquen a los manifestantes del CDM en su territorio, sin por ello apoyar a Suu Kyi y a la LND. El estado de Karen, en particular, en el este del país, se ha comprometido a proteger y apoyar a cualquier miembro de las fuerzas armadas que se ponga del lado del CDM.

Por parte del régimen, no se ha registrado ninguna deserción del ejército, a diferencia de la policía. Forma un cuerpo muy homogéneo en el que las familias de los soldados viven en un circuito cerrado. Constituye un poder paralelo a la administración civil de arriba abajo y en cada nivel utiliza su capacidad de influencia en la sociedad. Al controlar dos grandes conglomerados, así como el tráfico de piedras preciosas o de madera, la «economía caqui» es un capitalismo clientelar, capaz de cooptar incluso a figuras de la oposición

bamar (la etnia mayoritaria que vive en el delta del Irrawaddy). Se está llevando a cabo una prueba de fuerza para reunir a los representantes de las minorías étnicas. Los militares disponen de medios para aplicar una política universal de «divide y vencerás».

Se están instalando campamentos militares en las escuelas (para vigilar a la generación Z), las universidades y los hospitales (cuyo personal ha estado al frente de la resistencia y atendiendo a los heridos). Se ha liberado a más de 20.000 detenidos de derecho común para hacer sitio a los presos políticos y causar estragos en los manifestantes. Se ejerce una vigilancia obsesiva sobre la población. Los militares se jactan de poder matar y saquear a su antojo. La junta podría incluso organizar una hambruna para culpar a la resistencia. Combinando el terror, la corrupción y el empobrecimiento de una población ya muy castigada por la Covid, esperan agotarla.

La revolución democrática de Myanmar sabe que está inmersa en una lucha que puede durar mucho tiempo. Se enfrenta a un enemigo formidable que no debe ser subestimado. Ofrece una gran lección de valor y compromiso. No está solo. La reivindicación democrática ha adquirido una profunda resonancia en un momento en que el autoritarismo de los regímenes aumenta desde Asia hasta Europa, pasando por las Américas... provocando a su vez levantamientos cívicos capaces de lograr victorias significativas. Myanmar, con sus diversas poblaciones, se ha convertido en uno de los nuevos «frentes calientes» de una lucha universal.